



MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 050

Procedimiento: Ejecutivo.

Demandante: Juan Camilo Echeverri.

Demandados: Andrés Mauricio Correa Londoño.

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 007 2023 0004 01.

Procedencia: Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Asunto: Confirma, por otras razones.

Tema: Título ejecutivo en obligación de hacer y en obligación de suscribir documento.

Medellín, dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación interpuesto, en subsidio al de reposición, por la parte demandante contra el auto proferido el 27 de febrero de 2023, por medio de la cual se negó el mandamiento ejecutivo solicitado.

ANTECEDENTES.

El Sr. Juan Camilo Echeverri, por conducto de apoderado judicial, pretende que se ordene al Sr. Andrés Mauricio Correa Londoño *"la ejecución de todos los trámites pertinentes al diligenciamiento y firma de todos los documentos correspondientes a la cristalización de la compra venta del vehículo"* de placas GPS-995.

Afirmó que, al momento de inscribir dicho contrato, apareció una medida de embargo proveniente de la Fiscalía 65ª de Extinción de Dominio en donde se suspendía el poder dispositivo del prenotado automotor. Expuso que tal medida le resultó sorpresiva porque aquella no existía al momento en que

celebró el referido contrato con el Sr. Andrés Mauricio Correa Londoño. Por tal motivo, pide al juez civil realizar todos los actos necesarios para que el vehículo de placas GPS-995 entre en su peculio.

El juzgado, en auto del 27 de febrero de 2023, negó mandamiento de pago porque la medida de suspensión del poder dispositivo que recae sobre el vehículo de placas GPS-995, lo saca del comercio y, por tanto, no se puede realizar transferencia de dominio sobre este, impidiéndose así el requisito establecido en el inciso 2º del artículo 434 del CGP.

LA APELACIÓN.

Oportunamente el apoderado del ejecutante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, denotando, en síntesis: 1. Que cuando se celebró el contrato de compraventa sobre el vehículo de placas GPS-995, no existía la medida de suspensión del poder dispositivo, 2. Que actuó con diligencia al momento de celebrar el prenotado contrato de venta, 3. Que la inscripción de que trata el inciso 2º del artículo 434 del CGP, no es obligatoria porque el bien objeto de compraventa es un mueble que se perfecciona con la entrega; y 4. Que el artículo 47 de la Ley 769 de 2002 lo legitima como tercero de buena fe para pedir el levantamiento o cesación de una medida cautelar que lo perjudique.

El juzgado, al resolver el recurso horizontal, se mantuvo en su decisión. Explicó que el inciso 9º artículo 91º de la Ley 1847 de 2017 y parágrafo 1º del artículo 88º de la Ley 1708 de 2014, convertían la cautela de suspensión del poder dispositivo, en una que prevalece sobre cualquiera otra, por lo que, la emanada en este proceso, jamás la podría desplazar. Por ende, concedió la apelación interpuesta en subsidio, y para resolver la misma se,

CONSIDERA,

El auto cuestionado, concretado en la negación total del mandamiento ejecutivo, es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el numeral 4º del artículo 321 del CGP.

Bajo este contexto, se reprocha la compraventa sobre el vehículo de placas GPS-995, no existía la medida de suspensión del poder dispositivo; 2. Actuó con diligencia al momento de celebrar el prenotado contrato; 3. La inscripción

de que trata el inciso 2º del 434 del CGP, no es obligatoria porque el bien objeto de compraventa es un mueble que se perfecciona con la entrega; y 4. El artículo 47 de la Ley 769 de 2002 lo legitima como tercero de buena fe para pedir el levantamiento o cesación de una medida cautelar que lo perjudique.

Pues bien, la suscrita magistrada considera que más allá de lo quimérico que podría resultar el argumento sobre la imposibilidad de la inscripción del embargo que trata el inciso 2º del 434 del CGP o cualquier otro del disenso, en este asunto no existe título ejecutivo.

Nótese que el procedimiento regulado en el artículo 434 del CGP, supone el título (promesa) que indique claramente que un documento debe ser suscrito por el deudor en un determinado plazo, pues allí radica la existencia de una obligación actualmente exigible de suscribir determinado documento. Sin embargo y muy a pesar de que extrañamente alude en la generalidad de los hechos de la demanda a una "promesa de compraventa", el recurrente aporta –como título ejecutivo- el contrato de compraventa del vehículo de placas GPS-995 firmado por ambos contratantes (archivo 03 pág. 6 C-1). Luego, no es posible ordenar al demandado que suscriba algo que ya suscribió, ni mucho menos pedirle al juez que lo haga en su nombre, que, por demás, tampoco es lo formulado exactamente como pretensión en este caso, pues la misma claramente se orienta a reclamar la materialización del registro del contrato de compraventa ya suscrito por los contratantes, es decir, lo que se busca, equivocadamente, por esta vía, es la satisfacción de la principal obligación de un vendedor, que es la entrega o tradición de la cosa (art. 1880 C.C.). Pero esta clase de proceso se orienta a formalizar un título, para el caso, de dominio (art. 434 C.G.P.), no a lograr la tradición de la cosa, como mal lo sugiere el demandante.

Incluso, no puede existir en este caso una obligación actualmente exigible en los términos del artículo 433 del CGP (obligación de hacer), a lo que confusamente alude la demanda, porque se echa de menos un hecho material que deba ser cumplido por el deudor, pues el proceso ejecutivo por obligación de hacer que regula nuestro estatuto procesal, como brota de la regulación contenida en aquél precepto, se refiere a la ejecución de obras materiales, precisamente por ello se prevé la posibilidad de que "se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor", lo que claramente no es

predicable de la obligación de traditar que surge del contrato de compraventa de un bien sujeto registro, como sin lugar a dudas lo son los vehículos automotores (artículo 47 Ley 769/02).

Ahora, si lo que motiva esta demanda –como claramente aparece de la lectura de su texto- es la no inscripción en el registro nacional automotor, del prenotado contrato de compraventa celebrado por demandante y demandado, en razón de la medida de suspensión del poder dispositivo ordenada por la Fiscalía 65º de Extinción de Dominio, será otro el escenario donde se deberá hacer valer tal disgusto, esto es, el previsto en la Ley 1708 de 2014, artículos 1º numeral 1º, 13º, 28º, 30º, 31º y 32º.

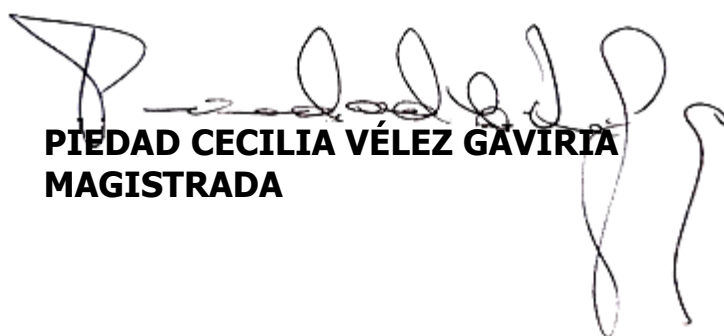
Por consiguiente, se confirmará la decisión apelada por las razones aquí expuestas, sin que sea menester adentrarse en el estudio de cualquier otra particularidad vinculada con la demanda. Así las cosas, la suscrita Magistrada,

RESUELVE,

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicadas, por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:
Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e85efb087181e6e722d9eea40ff2317b208d55920ca3ad4cf9f370f5c69d3ced**

Documento generado en 03/05/2023 08:33:48 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>